

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 93546-2024: a todo, téngase presente.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus fundamentos tercero a quinto, que se eliminan:

**Y se tiene en su lugar, y además presente:**

1º) Que resultan circunstancias no discutidas en esta sede, refrendadas por los antecedentes que constan en la carpeta electrónica correspondiente, que la amparada, por sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, en los autos RIT 330-2024, de fecha 29 de julio de 2024, fue condenada a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y al pago de una multa a beneficio fiscal, como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, disponiendo el cumplimiento efectivo de la pena corporal impuesta, desestimando la judicatura del fondo la pena sustitutiva de libertad libertada intensiva solicitada por la defensa, por estimar que los antecedentes de la sentenciada no satisfacen lo previsto en el artículo 15 y 15 bis de la Ley N° 18.216, ante lo feble del arraigo social que detenta en el país.

Apelada que fuera esa determinación, la Corte de Apelaciones de Iquique la confirmó.

2º) Que tampoco resultó discutido en esta sede, que la defensa en la oportunidad procesal pertinente acompañó un informe social y un informe psicológico que acreditan que la amparada es una mujer de 43 años, de nacionalidad venezolana, madre de cuatro hijos que residen en el país de origen, uno de los cuales es un menor de 14 años de edad. Además, se demuestra que la



amparada ingresó al país por paso no habilitado y reside en el territorio nacional de manera irregular; mantiene una relación de convivencia de 2 años con un nacional y se ha desempeñado de manera intermitente como temporera, no registrando otro reproche penal tanto en Chile como en el país del que es natural, presentando un bajo índice de reincidencia, por lo que la profesional informante recomienda el otorgamiento de la pena sustitutiva solicitada.

**3°)** Que, antes de entrar al fondo de la cuestión debatida, resulta pertinente realzar la procedencia de la acción constitucional de amparo como un remedio eficaz para corregir ilegalidades que se puedan incurrir en la dictación de una sentencia definitiva al pronunciarse sobre la concesión o no de una pena sustitutiva, aspecto de la sentencia que no produce efecto de cosa juzgada, desde que la Ley N° 18.290 encomienda a la judicatura la revisión, revocación y modificación de la que fuera otorgada, incluso durante su cumplimiento, infiriéndose de ello que esta determinación es susceptible de ser revisada ante circunstancias previstas en la legislación, más aún si se trata de enmendar una ilegalidad que afecta la garantía de libertad personal del sentenciado.

**4°)** Que, en cuanto al fondo, útil resulta recordar que el artículo 15 N° 2 de la Ley N° 18.290, en lo pertinente, dispone:

*“2.- Que los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren concluir que una intervención individualizada de conformidad al artículo 16 de esta ley, parece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social...”.*

**5°)** Que del mérito de lo expresado en el considerando 16° de la sentencia



dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, se advierte que la magistratura desestimó la pena sustitutiva solicitada por la defensa, en base a consideraciones relacionadas con la falta de arraigo social e ingreso irregular de la amparada al territorio nacional, aspectos que no dicen relación con los mandatos a los que alude el transcrito artículo 15 N° 2 de la Ley 18.216, y que entrañan un trato discriminatorio pues importa utilizar su condición de extranjera para desestimar la pena sustitutiva solicitada, categoría sospechosa que no es posible considerar como elemento diferenciador fundante de una decisión judicial, en virtud del principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, mandato jurídico que no admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

En efecto, desestimar la pena sustitutiva solicitada por la defensa, utilizando como único argumento la falta de arraigo social, importa sancionar más severamente a todo extranjero que ha sido condenado por la comisión de un simple delito, pues solo a ellos les afecta la falta de arraigo en el territorio nacional que la judicatura echa en falta, pese a haber sido condenada a una pena que admite su sustitución y la defensa allegó un informe psicológico favorable a la medida, todas circunstancias que dejan en evidencia el efecto discriminatorio de la determinación recurrida que autoriza el ejercicio de las facultades conservadoras de esta Corte.

6°) Que, por consiguiente, al haberse incurrido en una ilegalidad al desatender las particulares circunstancias personales y sociales de la amparada, y omitido efectuar una prognosis en cuanto al éxito del proceso de reinserción social al



que debe someterse, limitándose a fundar esa determinación en aspectos que sólo se justifican en su condición de extranjera residente irregular en el país, elementos que nada tienen que ver con la idoneidad de la pena sustitutiva solicitada para el proceso de reinserción social de la pena impuesta, se ha incurrido en un acto que importa un trato discriminatorio, que hace necesario dictar las medidas pertinentes que garantizan el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico otorga al afectado, y que pueden afectar su libertad personal.

En concreto, resultando suficiente los elementos de convicción allegados por la defensa, antes mencionados, para inferir que una intervención individualizada de conformidad al artículo 16 de esta ley, parece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social, se enmendará la sentencia dictada por el Tribunal en lo Penal de Iquique, disponiéndose que la pena en ella impuesta a la amparada, será sustituida por la libertad vigilada intensiva, en los términos que se dispondrá en lo resolutivo.

Por estos fundamentos y conforme a lo previsto por el artículo 21 de la Carta Política, **se revoca** la sentencia apelada de treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, en el Ingreso Corte N° 307-2024 y, en su lugar, se declara que **se acoge** el recurso de amparo interpuesto a favor de YUDITH ROSALITH PADRINO SUAREZ y, en consecuencia, se deja sin efecto la parte de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique en los autos Rol 330-2024, en cuanto dispuso el cumplimiento efectivo de la pena corporal impuesta, disponiendo que en su lugar que la misma **se sustituye por la Libertad Vigilada Intensiva**, debiendo elaborarse un programa de intervención individual por el mismo tiempo de duración de la condena, debiendo presentarse al



Centro de Reinserción Social de su domicilio dentro del plazo de 5 días contados desde que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra.

Además, la sentenciada deberá cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento, y con las condiciones legales de las letras a), b) y c) del artículo 17 de la Ley 18.216.

**SE DISPONE SU INMEDIATA LIBERTAD.**

**Acordada con el voto en contra de las Ministras Sras. Letelier y Gajardo**, quienes estuvieron por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese, comuníquese por la vía más rápida y devuélvase.

**Rol N° 45.291-2024.**





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y Abogado Integrante Juan Carlos Ferrada B. Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

